

# Crisis y pobreza rural en América Latina

La crisis financiera mundial tendrá efectos variados en los pobres. Se debe reconocer que esta crisis –a diferencia de los problemas generados por los altos precios del petróleo y alimentos, y que elevaron exponencialmente los precios de los insumos agrícolas y la inflación–, tiene una relación menos directa con el mundo rural y con sus sectores más pobres. Numerosas discusiones evidencian que el crecimiento de las economías nacionales no ha tenido un efecto sustantivo en la reducción de la pobreza rural y, por ello, una desaceleración del mismo podría tener pocos efectos en la pobreza rural.

Por otra parte, si bien los países de América Latina serán afectados por la crisis, se espera que sufran menos que otras regiones del mundo: su buen desempeño económico en los últimos años les ha permitido contar con reservas internacionales y fiscales para hacer frente a la crisis. Estudios recientes de Rimisp en Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, indican que solo tres de estos once países presentan un panorama pesimista, mientras que el resto, reconociendo la gravedad de la situación, mantiene una lectura de

“impacto controlado”. Los mayores efectos se verán en los pobres urbanos, en los mercados laborales (principalmente los ligados a sectores exportadores) y en los estratos más acomodados del mundo rural (los más integrados a mercados dinámicos de productos, factores productivos y empleo).

¿Cómo se verá afectado el sector rural de menores ingresos? La caída en las remesas internacionales será un factor clave para los pobladores rurales de Centroamérica, pero esto es subsanable con programas de apoyo temporal desde los gobiernos (como transferencias condicionadas, compensaciones temporales y otras.)

La caída en la demanda de agroexportaciones no tradicionales y de las maquilas, que podría traducirse en menores ingresos y menos empleo para los agricultores (aunque puede verse compensando por la caída en el precio de los insumos agrícolas y del mayor valor del dólar), afectará a grupos de pobladores rurales insertos en cadenas de producción y a aquellos con mejor posición relativa. Esto obligaría a mover la preocupación desde los más pobres hacia los hogares integrados que podrían caer en pobreza, tema que debe ser atendido por la política agraria.



Foto: Mariel García

**Carolina Trivelli**



Foto: Mariel García

**Johanna Yancari**


Economistas, Investigadoras del Instituto de Estudios Peruanos - IEP

La reducción de inversión pública local y nacional tendrá efectos en la disminución de la demanda de empleo no calificado, afectando entre otros la generación de empleo rural. No obstante, muchos planes anticrisis han puesto énfasis en mantener e incrementar inversiones en infraestructura y en programas de empleo temporal.

Los recortes en los presupuestos de las políticas sociales que llegan a los más pobres y vulnerables pueden ser otra fuente de transmisión de la crisis a lo rural. Sin embargo, las políticas de los países frente a la crisis consideran incrementos en el gasto social y la ampliación de la cobertura de los programas sociales. El tema, más bien, es durante cuánto tiempo pueden hacerlo.

Por otra parte, la crisis puede empujar hacia la pobreza a grupos vulnerables que hoy están por encima de la línea de la pobreza, pero es posible que a la vez se reduzca la desigualdad rural (porque los más ricos perderán más). Mucho dependerá del efecto que logren las políticas anticrisis.

El mayor desafío en las zonas rurales es identificar los mecanismos de transmisión de la crisis en cada país e identificar políticas para contrarrestarlos. Lo que parece sensato en todos los contextos es inducir políticas de apoyo a las políticas agrarias, en particular las dirigidas a la pequeña agricultura y agricultura familiar; políticas para mejorar los mecanismos de protección que ya tienen los hogares rurales y abrir oportunidades para ampliar sus estrategias de diversificación de ingresos y seguridad alimentaria.

Desgraciadamente, la precariedad de la institucionalidad pública relacionada con el agro en la mayor parte de nuestros países hace complejo imaginar que políticas de este tipo logren ganar centralidad frente a los planes anticrisis, que se basan en inversiones en infraestructura o en políticas sociales, donde se requiere ejecutores más sencillos, menos inversión en diseño y se logra ejecutar rápido el gasto. El desafío es generar una correlación de fuerzas para movilizar recursos hacia políticas de promoción y apoyo de la pequeña agricultura y agricultura familiar, al desarrollo de nuevos emprendimientos rurales no agrícolas y dotar a los ministerios de agricultura de las capacidades para implementarlas. 

**El desafío es generar una correlación de fuerzas para movilizar recursos hacia políticas de promoción y apoyo de la pequeña agricultura y agricultura familiar, al desarrollo de nuevos emprendimientos rurales no agrícolas y dotar a los ministerios de agricultura de las capacidades para implementarlas.**